



VISION[®]

F i n a n c i e r a

EVALUACIÓN DE PAÍS

y las implicaciones al no contar con la actualización del marco legal en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT) Pág. 10



Importancia de la ciber resiliencia en las entidades financieras guatemaltecas

Pág. 21

Provisiones bajo el enfoque de pérdidas esperadas

Pág. 24

Contenido

3 Presentación

4 Pluma invitada

Guatemala, entre los tres países con mayor adopción de uso de pagos sin contacto Visa en América Latina

7 Artículo

La historia de un ciclo cumplido - *LIBOR* (*London Interbank Offered Rate*)

10 Tema central

Evaluación de país y las implicaciones al no contar con la actualización del marco legal en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT)

15 Artículo

Relevancia de la coordinación de los esfuerzos para prevenir y reprimir el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM)

18 Artículo

Estrategias de reaseguro y su aplicación

21 Tecnología

Importancia de la ciber resiliencia en las entidades financieras guatemaltecas

24 Actualidad

Provisiones bajo el enfoque de pérdidas esperadas

El contenido incluido en cada una de las secciones es responsabilidad exclusiva de sus autores y no representa necesariamente la opinión oficial de la Superintendencia de Bancos.

Se autoriza la reproducción del contenido de esta publicación, sin fines comerciales, citando su fuente de origen.

Esta publicación es gratuita y queda prohibida su venta.

Directorio

Director General

Lic. Erick Armando Vargas Sierra
Superintendente de Bancos

Consejo Editorial

Lic. Hugo Rafael Oroxóm Mérida
Intendente de Coordinación Técnica

Lic. Byron Vinicio Méndez Castillo
Intendente de Estudios y Normativa

Ing. Miguel Alberto Arriaga Cruz
Director en funciones
Departamento de Desarrollo Institucional

Coordinador General

Lic. Hugo Rafael Oroxóm Mérida
Intendente de Coordinación Técnica

Director de Proyecto

Lic. José Ricardo Sánchez Segura
Supervisor
Departamento de Desarrollo Institucional

Superintendencia de Bancos Unidad de Información Pública

15 avenida 7-18, zona 13, Edificio Zepto, Nivel 3
PBX: 2429-5000 y 2204-5300
Ext. 1+2560/2561/2567
Correo electrónico: info@sib.gob.gt
www.sib.gob.gt

Si desea recibir por correo electrónico esta publicación y otras que divulga la **Superintendencia de Bancos**, suscríbase:



Al correo electrónico:
comunicacion@sib.gob.gt



Al teléfono: (502) 2429-5000
extensiones 1+4330 / 4351

“Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado”



Lic. Erick Armando Vargas Sierra
Superintendente de Bancos

Apreciables lectores:

La edición 42 de la revista **Visión Financiera** contiene como tema central la evaluación de país y las implicaciones al no contar con la actualización del marco legal en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT), el cual es esencial para evidenciar el compromiso de Guatemala para combatirlos.

Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), constituyen el estándar internacional de lucha contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), ya que abarcan todas las medidas que los países deben contemplar dentro de sus sistemas para combatir estos ilícitos.

Por ello, el cumplimiento de las Recomendaciones debe ser un

tema prioritario para los países miembros del GAFI y sus organismos regionales. Un elemento clave para conseguir tal objetivo, lo constituye el proceso de evaluaciones mutuas bajo la metodología desarrollada por el GAFI.

Guatemala finalizó su último proceso de evaluación con la publicación de su informe en 2016; posterior a ello, ha remitido al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) los informes de seguimiento correspondientes y está próxima a la revisión del quinto año.

Es preciso resaltar que aún existen importantes brechas que es necesario cerrar, las cuales requieren de una actualización de la normativa vigente para que nuestro sistema legal contenga los aspectos que se toman en cuenta en la evaluación y que evidencian el compromiso que Guatemala tiene para combatir el LD/FT.

Si la evaluación de Guatemala reflejara calificaciones muy bajas, correría el riesgo de ser incorporado como país no cooperante a nivel internacional, los cuales son considerados de alto riesgo e identificados por el GAFI en documentos públicos. Ello conllevaría posibles sanciones financieras y comerciales para nuestro país, así como debilitaría el marco legal para combatir estos ilícitos, al no estar actualizado.

Por lo tanto, la actualización de la normativa contra LD/FT es relevante

para cumplir las Recomendaciones, así como para evitar sanciones internacionales que pondrían en duda el compromiso y esfuerzos de Guatemala en su lucha contra estos ilícitos.

Por aparte, agradezco a nuestra pluma invitada, señor Arturo Luna, Director Ejecutivo de Relaciones con Gobierno de Visa México, Centroamérica y el Caribe, quien nos comparte que Guatemala se encuentra entre los tres países con mayor adopción de uso de pagos sin contacto Visa en América Latina.

Adicionalmente, reconozco el valioso aporte de los colaboradores de la Superintendencia de Bancos, quienes abordan artículos innovadores y de interés como: la historia de un ciclo cumplido - LIBOR (*London Interbank Offered Rate*); relevancia de la coordinación de los esfuerzos para prevenir y reprimir el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; estrategias del reaseguro y su aplicación; importancia de la ciber resiliencia en las entidades financieras guatemaltecas; y, provisiones bajo el enfoque de pérdidas esperadas.

Espero que esta edición, sea de su interés y agrado.

Atentamente,

Lic. Erick Armando Vargas Sierra
Superintendente de Bancos

Guatemala, entre los tres países con mayor adopción de uso de pagos sin contacto Visa en América Latina



Arturo Luna

Director Ejecutivo de Relaciones con Gobierno de Visa México, Centroamérica y el Caribe

Es Economista con Maestría en Gerencia Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Cuenta con diversos estudios de especialización en instituciones como la Universidad de Texas en Austin, EE. UU., Universidad de Columbia en Nueva York y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Desde el 2000 es profesor de Economía Política en la Escuela Libre de Derecho de México. En 2013 empezó su carrera en Visa como responsable de los asuntos de gobierno para México. En 2016, amplía su responsabilidad a Centroamérica y desde 2019 hacia el Caribe. Dentro de sus principales tareas se encuentran la relación con autoridades, seguimiento a la regulación en materia de medios de pago, inclusión financiera y otros relevantes para la industria, promover mejores prácticas entre los gobiernos para acelerar la adopción de los pagos digitales. Tiene experiencia de más de doce años trabajando en diferentes entidades del Sector Público en México, incluidas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



El COVID-19 trajo desafíos sin precedentes en la forma en que vivimos. Más de un tercio de la población mundial estuvo bajo algún tipo de orden de resguardarse en casa para ayudar a desacelerar la propagación del coronavirus. Y aunque muchos países ya levantaron restricciones, el distanciamiento social seguirá siendo parte de nuestras vidas durante algún tiempo. Todas estas medidas han reconfigurado gran parte de nuestra cotidianidad, por lo que ahora los comercios y consumidores están recurriendo a los pagos sin contacto como parte de sus rutinas, ya que permiten realizar este de manera digital con solamente acercarse para pagar con una tarjeta sin contacto o un dispositivo móvil.

Visa está comprometida en ofrecer soluciones de pago seguras y confiables que cubran las necesidades de los

Fuente: Visa, Government Engagement Mexico, Central America & Caribbean.

comercios y sus clientes. Los pagos sin contacto se están convirtiendo rápidamente en la forma preferida de pagar en todo el mundo.

En Guatemala, las transacciones sin contacto Visa representaron más del 67% de las transacciones realizadas en persona, convirtiéndose en uno de los tres países con mayor penetración de pagos sin contacto¹, siguiendo a Costa Rica con el 70% y Chile con el 81%.

“
En América Latina y el Caribe los seis países que superan el umbral de adopción del 50% de pagos sin contacto Visa son: Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, las Bermudas y Perú.
”

En la región de América Latina y el Caribe tanto los consumidores como los comercios han adoptado los pagos sin contacto por su rapidez y conveniencia. Pero la conveniencia no es el único factor que lleva a su adopción, las tarjetas sin contacto también son seguras contra el fraude. Usando la misma tecnología que el *Chip EMV®*, las tarjetas sin contacto son eficaces en prevenir el fraude por falsificación al utilizar un código de un solo uso que evita que si hubieran datos comprometidos puedan ser usados de nuevo para cometer fraude. De hecho, entre los diversos tipos de pago, las tarjetas sin contacto tienen algunos de los índices de fraude más bajos, significativamente más bajos



Fuente: Visa, Government Engagement Mexico, Central America & Caribbean.

que el índice de las tarjetas de banda magnética y comparables al índice de las tarjetas convencionales con chip.

A medida que el mundo experimentó un cambio hacia el comercio digital en el último año, la tokenización se ha convertido en una de las formas más eficaces de evitar el fraude y permitir experiencias de pago digital más seguras y fáciles. Esta tecnología invisible sustituye los datos sensibles de la cuenta de una tarjeta por un identificador digital, o *token*, ya que estos ofrecen más protección contra los estafadores. Así pues, tanto si un consumidor paga con una tarjeta sin contacto, una billetera digital o un *wearable*, las capas de seguridad de Visa protegen la transacción subyacente en todo momento.

Aunque todavía no podemos visualizar por completo el impacto total que puede tener el COVID-19 en la adopción global de la tecnología *contactless*, se vio un cambio en el gasto de los consumidores hacia segmentos donde el uso de los pagos sin contacto es alto, como en supermercados y farmacias. En la región, esto está generando una

mayor concientización y uso entre consumidores que buscan limitar la interacción al pagar, dada la situación actual. Por ejemplo, en EE. UU. el uso de pagos sin contacto en segmentos cotidianos, ha crecido más del 100% año tras año.

Los consumidores en la región están adoptando estas nuevas tarjetas *contactless*, y no solo más consumidores tienen tarjetas, sino que las están usando a medida que el crecimiento de las transacciones con tarjetas sin contacto sigue en aumento.

Recursos y mejores prácticas para el punto de venta

Visa ha desarrollado una nueva señalización y productos de *marketing* complementarios para los comercios que han habilitado terminales *contactless* y que están interesados en dar a conocer a sus clientes cómo pagar acercando la tarjeta o el dispositivo móvil. Estos materiales están disponibles junto con guías de mejores prácticas y recursos educativos para el personal.

¹ Datos VisaNet a septiembre 2021.

Muchos comercios en la región y supermercados ya han implementado las mejores prácticas de la tecnología *contactless* al pagar en sus cajas.

Visa ha estado trabajando con múltiples actores del ecosistema de pagos como bancos, comercios, gobiernos y empresas *Fintech* para aprovechar este impulso y seguir promoviendo la adopción de los pagos sin contacto en la región, especialmente en sectores nuevos y de nicho como la movilidad urbana.

Precisamente, en Guatemala, los portadores de credenciales de pagos sin contacto Visa, desde diciembre de 2020 pueden pagar el transporte público denominado Transmetro. Esta iniciativa, la tercera que se puso en marcha en América Latina y el Caribe, fue desarrollada bajo un modelo global interoperable, es decir un sistema de pagos abierto, mediante el cual los usuarios podrían utilizar medios de pagos sin contacto, de cualquier parte del mundo, como lo son, las tarjetas Visa de crédito, débito o prepago emitidas por cualquier banco del país, para realizar el pago del transporte.

Visa tuvo un rol activo en la definición del sistema de aceptación de pagos digitales sin contacto en el transporte público en Guatemala. Con base en la implementación de soluciones globales, contribuimos con la definición del modelo de operación replicando también, dichas experiencias de pagos de transporte masivo en otros países de la región como Brasil, República Dominicana, Colombia, Costa Rica y México, buscando siempre generar un mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios del sistema de transporte masivo en América Latina.

A varios meses de la puesta en marcha de la iniciativa en Guatemala, la compañía realizó un análisis sobre las transacciones realizadas en el transporte. Entre mayo y septiembre de 2021, 94 mil tarjetahabientes usaron sus credenciales sin contacto en el transporte y realizaron 640 mil viajes. Además, las transacciones de pagos sin contacto en el transporte mostraron un crecimiento mensual de 17% durante ese período.

Esta implementación marca un antes y un después en la forma de pago del servicio de transporte público en Guatemala, llevando a otro nivel de innovación y tecnología un proceso cotidiano, que además de aportar practicidad ofrece un sistema de seguridad fortalecido, garantizando que las transacciones de los usuarios sean seguras y confiables. Esto es posible también, gracias a la decidida participación e inversión de las instituciones que conforman el sistema financiero guatemalteco y a la existencia de un marco regulatorio que facilita la innovación, al tiempo que protege a los usuarios. El avance de los pagos sin contacto en Guatemala contribuirá a acelerar la adopción de los pagos digitales en el país, al abrir la aceptación en giros de comercio y servicios que históricamente han sido usuarios del efectivo.

Pagos sin contacto Visa

Esta solución permite hacer pagos sin contacto físico entre la tarjeta y la terminal. Las tarjetas Visa y los dispositivos inteligentes habilitados con tecnología para pagos sin contacto, tienen un microchip incorporado que sirve para comunicarse de forma segura con el lector del punto de venta.



Énfasis en seguridad

Para Visa, la seguridad de los pagos es una prioridad y los pagos desde los dispositivos con tecnología *contactless* o pagos por proximidad o sin contacto no son la excepción.

Varias capas de seguridad funcionan en conjunto para impedir el uso no autorizado de cuentas Visa basadas en tecnología *contactless*.

TOKENIZACIÓN EN PAGOS MÓVILES SIN CONTACTO - Una norma que se creó para reemplazar los números de cuenta por "tokens digitales" que son un número distinto asignado para cada dispositivo.

TECNOLOGÍA CHIP - Las tarjetas sin contacto cuentan con la misma tecnología segura que cualquier tarjeta chip de Visa.

ANÁLISIS DE RIESGO - El cual se realiza para cada transacción en el segundo que esta sucede.

RANGO DE LECTURA RESTRINGIDO - Las tarjetas sin contacto Visa deben estar a 4-5 centímetros de la terminal del comercio para que la información de la tarjeta pueda ser transmitida.

VISA

A medida que el impacto de la pandemia sigue reconfigurando gran parte de la vida cotidiana y la forma de hacer negocios, Visa mantiene su compromiso con nuestra misión principal de conectar al mundo para que las personas, las empresas y las economías prosperen. Los pagos seguros y confiables en el punto de venta o virtualmente seguirán siendo una de nuestras prioridades a medida que apoyamos a los comercios que mantienen a nuestras comunidades en marcha a reactivarse nuevamente y salir de este período fortalecidas con soluciones de pago que se ajusten a sus necesidades y a las de sus clientes.



Célico Stanly Escobar Luna

Profesional del Departamento de Análisis
Macroprudencial y Estándares de Supervisión de la SIB

Licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Administración Financiera, ambos grados otorgados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con la certificación Internacional de Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO9001:2015 e ISO19011:2018 INLAC – México. Posee experiencia en el ámbito bancario, asegurador, supervisión de riesgos y estándares de supervisión. Actualmente, es miembro suplente del Comité de Estándares del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras (CCSBSO).

Las tasas de interés interbancarias han jugado un papel preponderante en el sistema financiero internacional, debido a que expresan el precio de las operaciones que realizan las entidades bancarias entre sí y a la vez proporcionan una sólida referencia para una amplia variedad de contratos financieros.

Un claro ejemplo es la *London Interbank Offered Rate*, comúnmente llamada tasa LIBOR, que se ha convertido en una de las referencias más importantes a nivel mundial, si no es que en la más importante. Con base en ella, se definen desde instrumentos derivados de tasas de interés complejos, hasta productos financieros más comunes ofrecidos por los bancos comerciales como hipotecas, créditos al consumo, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles, entre otros. A mediados de 2018, el volumen de contratos referenciados a tasa LIBOR, en alguna de las monedas principales (dólares americanos, libra esterlina, euros, entre otras), rondaba los USD400 billones¹.

¹ Es importante aclarar que el grueso de este monto corresponde al valor nominal de contratos de derivados.

La historia de un ciclo cumplido - *LIBOR* (*London Interbank Offered Rate*)



Esta surge a principios de la década de los ochenta con la intención de proporcionar una referencia para nuevos instrumentos como los préstamos sindicados y los *forwards* de tasa de interés. Muchos bancos se mostraban inseguros respecto a la manera en la que las tasas utilizadas como subyacente en estos productos eran fijadas y para resolver dicho problema se requirió a la Asociación Bancaria Británica (BBA, por sus siglas en inglés) intervenir con el fin de crear un índice de referencia que diera un poco más de certeza a los participantes en el mercado y, de esta manera, se contaría con un estándar para realizar este tipo de operaciones.

En términos generales, el nuevo índice se definía a través de una encuesta que, principalmente, preguntaba a las entidades bancarias: ¿A qué tasa cree que los depósitos interbancarios serán ofrecidos por un banco principal a otro banco principal por un tamaño de mercado razonable hoy a las 11 am? Cuestionamiento que dichas entidades debían responder todos los días y enviar sus respuestas a la BBA, quien, con la información recabada, construía el indicador. Esta encuesta fue modificada en 1998 debido a que, según la BBA, existían algunos inconvenientes con los términos utilizados, siendo el más importante en esa época, establecer a qué entidades se les podía considerar como un banco principal y además obligaba a estos a reportar pensando en una institución hipotética en lugar de hacerlo con base en su propia actividad en el mercado interbancario, por lo que, la pregunta fue modificada quedando de la manera siguiente: ¿A qué tasa podría pedir prestados fondos, si lo fuera a hacer pidiendo y después aceptando ofertas interbancarias en un mercado de tamaño razonable justo antes de las 11 am?. Considerando que con esta modificación se resolvía todo el problema sobre la especulación que los bancos tenían que hacer para ofrecer una respuesta, desde entonces la LIBOR ha funcionado de la misma manera.

Esta también es empleada como una medida en el mercado crediticio, de

dinero y en el de derivados, además mide la presión sobre estos mercados, por lo que es utilizada como un indicador por los bancos centrales.

Situación

Después de la crisis financiera de 2007-2008 los organismos de control y supervisión se vieron obligados a mejorar sus procesos y a profundizar las regulaciones prudenciales, debido a malas prácticas aplicadas por parte de muchas entidades que perjudicaron la confianza y credibilidad de los bancos que conforman los principales centros financieros del mundo. Con las modificaciones regulatorias poscrisis y en medio de un escenario de abrupta caída de los préstamos interbancarios, avanzó el cuestionamiento sobre la utilidad de este índice como referencia para el resto de los contratos financieros.

Esta se vio afectada en su credibilidad en 2012 cuando se descubrió su manipulación por importantes bancos de los Estados Unidos de América, y el Reino Unido para beneficio propio, los cuales tuvieron que enfrentar multas, aproximadamente, por USD9 billones. El Tesoro del Reino Unido calculó que el valor de los contratos que la utilizaban como referencia prácticamente quintuplicaba el Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Asimismo, en julio de 2014, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), publicó un informe que ponía de manifiesto la vulnerabilidad de LIBOR ante posibles manipulaciones, dado que esta se basa en las referencias que aporta un panel muy limitado de bancos. Además, esta representa los tipos de interés de los préstamos interbancarios sobre una base no garantizada, mientras que la inmensa mayoría de estos préstamos se realizan con garantías. Las mayores críticas y discrepancias se centran en que la verdadera tasa de préstamo interbancario estaba sesgada, debido a que los bancos que participaban en la encuesta reducían sus actuales costos de préstamos, por lo que, el mismo Consejo de Estabilidad Financiera sugiere que sea reformulada para que refleje mejor el estado de los mercados.

En ese mismo año la administración de la LIBOR era ejecutada por la BBA, pero a raíz de esta situación, pasó a manos del *Intercontinental Exchange (ICE)*² a través del *ICE Benchmark Administration (IBA)*³.

Otro de los principales argumentos en contra de la LIBOR como *benchmark*, es que esta es el resultado de una encuesta y no de valores de mercado observados, tomando en cuenta tasas interbancarias con vencimiento menor a un año, a pesar de que la mayor parte del volumen negociado en este mercado se encuentra a un mes y a *overnight* (un día). Adicionalmente, la LIBOR a largo plazo se encuentra más relacionada con las expectativas de tasas de interés que con la tasa de préstamos interbancarios, hecho que genera altos niveles de tensión en el sistema bancario internacional.

Futuro

En julio de 2017, Andrew Bailey director ejecutivo de la *Financial Conduct Authority (FCA)*, por sus siglas en inglés,⁴ anunció que no se podía garantizar que la LIBOR se continuará publicando después de 2021, debido a la reducción de transacciones relacionadas con ella, por lo que, la misma FCA planteó la necesidad de buscar otras alternativas que pudieran sustituir a esta y propiciar una adecuada transición de los mercados hacia un nuevo índice de referencia.

En respuesta a esta situación, se establecieron grupos de trabajo para reforzar los índices

² *Intercontinental Exchange (ICE)*, es una empresa estadounidense que posee y opera mercados e intercambios financieros y de productos básicos. Fundada en mayo de 2000 en Atlanta, Georgia. Sus operaciones incluyen bolsas de futuros, bolsas de efectivo, cámaras de compensación centrales y servicios de mercado para operaciones fuera de bolsa.

³ *ICE Benchmark Administration (IBA)*, entidad que asumió la administración de la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR) en 2014 después de un escándalo en el que se descubrió que los operadores bancarios manipularon dicha tasa para beneficiar sus propias posiciones comerciales y es una unidad del *Intercontinental Exchange (ICE)*.

⁴ *Financial Conduct Authority (FCA)* es el regulador es el regulador de conducta para casi 60 mil empresas de servicios financieros y mercados financieros en el Reino Unido y el supervisor prudencial de 49 mil de ellas, estableciendo estándares específicos para 19 mil de estas empresas.

de referencia ya existentes en todo el mundo y sustituir la LIBOR por índices alternativos (conocidos como RFRs o tasas libres de riesgo –*nearly risk free rates*–), basados en transacciones reales, observables en el mercado y con el objetivo de contar con índices de referencia más sólidos y menos expuestos a la manipulación.

Por todo lo anterior, la FCA decidió que, a finales de 2021, el conjunto de bancos participantes en el cálculo de dicho índice ya no estará obligado a publicar estimaciones de la LIBOR, por lo que, se considera que esta no se publicará más allá de esta fecha.

Por otra parte, es importante hacer notar que los índices de referencia *overnight* sugeridos para hacer la sustitución de la tasa LIBOR han estado disponibles en USD (dólares americanos), CHF (francos suizos), GBP (libras esterlinas) y JPY (yenes japoneses) desde finales de 2018, así como el índice de referencia en EUR denominado Euro *short-term* (ESTER) desde octubre de 2019, publicado por el Banco Central Europeo.

OPCIONES DE REEMPLAZO DE LA LIBOR

Índice LIBOR	Índice de sustitución propuesto	Tipo de préstamo	Grupos de trabajo	Administrador
EUR LIBOR	ESTER (Euro Short-Term Rate)	Sin garantía	Grupo de trabajo europeo	Banco Central Europeo
USD LIBOR	SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Garantizado	Comité de Tasas de Referencia Alternativas (ARRC, por sus siglas en Inglés)	Banco de la Reserva Federal
GBP LIBOR	Reformed-SONIA (Sterling Overnight Index Average)	Sin garantía	Grupo de trabajo de tasas de interés libres de riesgos en libras esterlinas del Banco de Inglaterra	Banco de Inglaterra
CHF LIBOR	SARON (Swiss Average Rate Overnight)	Garantizado	Grupo de trabajo nacional de tasas de referencia del franco suizo	Bolsa de Valores de Suiza
JPY LIBOR	TONAR (Tokyo Overnight Average Rate)	Sin garantía	Grupo de estudio japonés de tasas de referencia libres de riesgo	Banco de Japón

Fuente: Bank for International Settlements (BIS).

No obstante, a pesar de la decisión de terminar con la publicación de la LIBOR, la ICE Benchmark Administration Ltd. (IBA), anunció su intención de continuar publicando los índices de referencia LIBOR en dólares a tres, seis y doce meses hasta junio de 2023, intención que fue apoyada por la FCA, con el fin de continuar utilizando el referido índice en operaciones y contratos de crédito vigentes a los que no se les pueda sustituir la tasa LIBOR pactada (conocidos como *legacy contracts*) y de esa forma evitar inconvenientes de tipo contractual.

El Comité de Tasas de Referencia Alternativas⁵ (ARRC, por sus siglas en inglés) ha estimado que cerca de USD223 billones lo constituyen contratos financieros referenciados a USD LIBOR, de ellos USD74 billones podrán estar vigentes con posterioridad al 30 de junio de 2023, comprendidos USD69 billones de derivados y USD5 billones en productos

de equivalente a efectivo. No obstante, los contratos suscritos bajo la legislación de New York estarán migrando hacia SOFR, según lo adecúen sus cláusulas, en la búsqueda de nuevas y mejores alternativas a dicha sustitución, el 28 de mayo de 2020, el presidente de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América (FED), Jerome Powell, se pronunció sobre la idoneidad del uso de la tasa AMERIBOR como otra opción de reemplazo. Dicha declaración fue en respuesta a la consulta presentada por el senador Tom Cotton, en la cual consultó si la Reserva Federal respaldaba otras tasas de interés de referencia alternativas además de la SOFR, como la AMERIBOR. Por aparte, también figura en los mercados el *Bloomberg Short Term Bank Yield Index* (BSBY)⁶.

Algunos bancos norteamericanos han expresado su preferencia para el uso en préstamos de tasas o complementos “sensibles al crédito”⁷ como LIBOR, aunque los prestatarios expresan su preferencia por SOFR, pese a que esta domina en las operaciones de derivados y en los mercados de capitales.

Es importante mencionar que el sistema bancario nacional no es ajeno a los efectos que dicha transición pueda llegar a ocasionar, debido a que entre las fuentes de fondeo más comunes con las que la mayoría de las entidades bancarias nacionales cuentan, están las líneas de crédito de bancos del exterior provenientes principalmente de Estados Unidos, las que se encuentran negociadas generalmente a la tasa de referencia LIBOR. De modo que, será de suma importancia poner especial atención a las condiciones sobre las cuales se tomen dichos financiamientos, a la rentabilidad financiera y los riesgos que se pudieran generar en las entidades.

⁵ El Comité de Tasas de Referencia Alternativas (ARRC) es un grupo de participantes del mercado privado, reestablecido en 2018 por la Junta de la Reserva Federal y la Fed de Nueva York, para impulsar la efectiva implementación de un plan para la transición de la USD LIBOR a su alternativa recomendada, SOFR.

⁶ BSBY es un índice patentado calculado diariamente y publicado a las 8:00 am (ET) en cada día hábil que proporciona una serie de tasas de referencia sensibles al crédito que incorporan los diferenciales de crédito bancario y definen una estructura de plazos.

⁷ La Junta de la Reserva Federal y la Fed de Nueva York impulsó talleres (CSG workshops) para facilitar la transición de la tasa USD LIBOR.

Evaluación de país y las implicaciones de no actualizar el marco legal en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo



Saulo De León Durán

Intendente de Verificación Especial de la SIB
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera

Abogado y Notario egresado de la Universidad Francisco Marroquín, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) en el INCAE. Cuenta con especializaciones internacionales en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, administración de riesgos financieros, planeación estratégica, entre otros. Con experiencia en banca, *leasing*, fideicomisos y estructuración de créditos internacionales, regulación financiera, administración de riesgos, entre otros. Fue Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG); Intendente de Verificación Especial (Jefe de UIF) de 2008 al 2010; lideró la defensa de Guatemala ante la Evaluación Mutua del GAFIC sobre el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI en 2010. Ha realizado consultorías y ha sido conferencista sobre regulación financiera a nivel nacional e internacional.



Las Recomendaciones¹ del Grupo de Acción Financiera (GAFI) constituyen el estándar internacional de lucha contra el Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM); y cubren todas las medidas que los sistemas nacionales deben tener dentro de sus sistemas normativos; medidas preventivas a aplicar por las instituciones financieras y las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD); así como la cooperación internacional que debe existir en la lucha contra el LD/FT.

El cumplimiento de estos estándares es un tema prioritario y un elemento clave, es la necesidad de que los sistemas de los países sean objeto de seguimiento y evaluación en contraste con dichos estándares. Por ello, existen procesos

¹ Disponible en línea: <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/3493-recomendaciones-metodologia-act-jul-19/file>

de evaluaciones mutuas conducidas por el GAFI y los grupos regionales al estilo GAFI², que constituyen el instrumento para asegurar que los estándares sean efectivamente implementados a lo interno de los países.

El alcance de las referidas evaluaciones involucra dos componentes.

1 Cumplimiento técnico, aborda los requisitos específicos de las Recomendaciones del GAFI, principalmente, en lo que respecta al marco jurídico e institucional relevante del país, y los poderes y procedimientos de las autoridades competentes.

2 Efectividad, evalúa la idoneidad de la implementación de las Recomendaciones del GAFI, e identifica el grado en que un país alcanza un conjunto definido de resultados que son fundamentales para un sólido sistema ALD/CFT. El enfoque de la evaluación de la efectividad se determina en la medida en que el marco legal e institucional produce los resultados previstos.

En conjunto, las evaluaciones de cumplimiento técnico y de efectividad, presentarán un análisis integrado de la medida en que el país cumple con los estándares del GAFI y el éxito logrado en mantener un sistema sólido ALD/CFT.

Al finalizar la evaluación, se publica el Informe de Evaluación Mutua (IEM) con los resultados del país.

2 Los grupos regionales están creados al estilo GAFI adhiriéndose a las 40 Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el LD/FT/FPADM, se dedican a la difusión e implementación de las Recomendaciones en sus países miembros. Actualmente, existen 9 grupos regionales: *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)*, *Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)*, *Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)*, *Eurasian Group (EAG)*, *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)*, *Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)*, *Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA)*, *Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)* y *Task Force on Money Laundering in Central Africa (GABAC)*. Guatemala pertenece al GAFILAT, junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay..

Situación de Guatemala

Guatemala finalizó su último proceso de evaluación con la publicación de su IEM³ en el 2016; posteriormente, y en virtud de haber quedado en un seguimiento intensificado frente al GAFILAT, ha remitido los informes de seguimiento correspondientes y está próximo a entrar a la revisión del quinto año⁴.

El principal reto para el país es demostrar la fortaleza de su sistema ALD/CFT, que su normativa ha sido actualizada y que contiene los aspectos considerados en las Recomendaciones del GAFI y poder evidenciar la efectividad del sistema.

Los procesos de evaluación mutua del GAFI son de gran importancia para conocer, a través de un marco común internacional, el estado de adopción por parte de los países y el nivel de efectividad de las Recomendaciones; coadyuvando al fortalecimiento de los sistemas de prevención y represión del LD/FT/FPADM.

En ese sentido, cabe recordar que en el IEM de Guatemala se establecieron 25 acciones prioritarias que fueron señaladas al país como parte de su última evaluación y que serán objeto de verificación en el próximo proceso de evaluación. A continuación, se presentan solamente aquellas acciones que requieren cambios legislativos para poder cerrar la brecha señalada.

Acciones prioritarias señaladas en el IEM de Guatemala 2016, que requieren una modificación legislativa para cerrar la deficiencia	
1	Revisar el análisis de riesgos de FT que incorpore los posibles abusos al sector financiero, APNFD y OSFL, en particular aquellos que aún no son Personas Obligadas (PO), así como el papel de la economía informal que ocasiona falta de control de transacciones y tiene un impacto en el cálculo del riesgo de FT.
2	Tomar acciones claras que permitan incluir como PO a las APNFD, las instituciones microfinancieras y aquellas actividades o sujetos físicos o jurídicos que deban ser PO, se encuentren registrados y en cumplimiento de las obligaciones ALD/ CFT.
3	Modificar la tipificación del delito de FT para que se extienda a lo exigido por la Recomendación.
4	Arbitrar los medios necesarios para rediseñar el marco normativo en relación con la estructura de sanciones posibles a ser aplicadas a modo de que se impongan sanciones pecuniarias administrativas proporcionales con relación a los diferentes sectores (financieros y no financieros) y disuasivas.
5	Fortalecer el marco legal, que permita implementar plenamente las resoluciones del CSNU ⁵ en materia de FT/FPADM. Además, generar los mecanismos para realizar designaciones domésticas en virtud de la RCSNU ⁶ 1373 y establecer procedimientos para realizar el descongelamiento o cese de la medida.
6	Aprobar las regulaciones pertinentes a fin de que las personas jurídicas identifiquen a los beneficiarios finales de las acciones que conforman su patrimonio.
7	El desarrollo del marco legal que permita la publicidad de los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas.
8	Desarrollar mecanismos que faciliten el acceso oportuno a la información de las personas y estructuras jurídicas.

Fuente: IVE.

3 Disponible en línea: <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/guatemala/evaluaciones-mutuas-8/158-iem-guatemala-cuartaronda>

4 De conformidad con los procedimientos establecidos, el país será sujeto a una evaluación de seguimiento después de cinco años de finalizada la aprobación del IEM, en el cual se evalúa los avances para el fortalecimiento de su sistema contra el LA/FT.

5 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), es un órgano de las Naciones Unidas (ONU), que, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales. De acuerdo con la carta, todos los Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros, están obligados a cumplir. El Consejo puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos; para ello emite Resoluciones (RCSNU) en las cuales expresan la voluntad de los órganos de la ONU.

6 Resolución que establece que todos los Estados prevengan y repriman la financiación de actos terroristas y se abstengan de proporcionar apoyo a entidades o personas que participen en la comisión de tales actos.

Existen aún importantes brechas que es necesario cerrar, pero que requieren actualizar la normativa vigente para que nuestro cuerpo legal contenga los aspectos relevantes que establecen los estándares internacionales y poder cumplir con las acciones prioritarias requeridas.

A continuación, se mencionan los últimos cambios realizados a las Recomendaciones, mismos que también serán evaluados en el próximo proceso, junto con las brechas identificadas en el IEM de 2016 pendientes de cumplir.

R. 2 Cooperación y coordinación nacional.	R. 5 Delito de FT.	R. 7 Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación.	R. 8 Organizaciones Sin Fines de Lucro.	R. 15 Nuevas tecnologías.	R. 18 Controles internos, sucursales y filiales extranjeras.	R. 21 Revelación (<i>tipping-off</i>) y confidencialidad.
---	------------------------------	---	---	-------------------------------------	--	---

a Recomendación 2. Cooperación y coordinación nacional. En el pleno de febrero de 2018, se modificó su contenido, con el objetivo de:

- ⇒ Promover el intercambio de información entre autoridades competentes, adicionando que estas además de cooperar y coordinar sus acciones tengan la posibilidad de intercambiar información entre sí.
- ⇒ Garantizar la compatibilidad de los requisitos de prevención de LD/FT con las reglas de privacidad y protección de datos; adicionando que la cooperación y coordinación entre las autoridades deberá garantizar la compatibilidad de los requisitos ALD/CFT con las normas de protección de datos y privacidad.

b Recomendación 5. Delito de FT.

- ⇒ Sufrió una primera modificación en el pleno de octubre de 2015, se agregó que el FT incluye la financiación del viaje que hacen individuos a un estado distinto de sus estados de residencia o nacionalidad con el objetivo de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas o proveer o recibir entrenamiento terrorista (con base en la RCSNU⁷ 2178).

⇒ Una segunda modificación se efectuó en el pleno de octubre de 2016, en la cual se modificó su Nota Interpretativa (NI)⁸ para unificar el alcance con la Recomendación 6 (sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el FT). Adicionalmente, en el glosario se modificó la definición de “fondos u otros activos” agregando referencias al petróleo y otros recursos naturales, y a otros activos que potencialmente pueden usarse para obtener fondos.

c Recomendación 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación⁹. En el pleno de junio de 2017 se modificó su NI y las definiciones del glosario; a continuación, se presentan las principales modificaciones:

- ⇒ Se incorporó la RCSNU 2356 (2017), en relación con las sanciones financieras contra la República Popular Democrática de Corea.
- ⇒ Algunos elementos se han ajustado para reflejar cambios en la terminología utilizada en las RCSNU; por ejemplo, se agregaron las definiciones del glosario de

“persona o entidad designada”, “designación” y “sin demora”.

- ⇒ Se actualizaron los criterios para alinearse con los establecidos en la RCSNU 2231 (2015), relativa a la cuestión nuclear de Irán.

d Recomendación 8. Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). Se modificó la Recomendación y su NI en el pleno de junio de 2016, a fin de asegurar que su implementación se encuentre en línea con el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y que no interrumpa o desaliente las actividades sin fines de lucro legítimas. Los principales cambios fueron:

- ⇒ Eliminó el término “particularmente vulnerable” y se modificó el lenguaje a fin de aclarar que no todas las OSFL son de alto riesgo.
- ⇒ La Recomendación ya no está destinada a aplicarse a todo el sector sino a las OSFL que presentan el mayor riesgo de abuso de FT.
- ⇒ Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las OSFL que el país ha identificado como vulnerables y establecer medidas en línea con el EBR.

Los principales cambios a la NI fueron:

- ⇒ Se incluyó un reconocimiento de la importancia que juegan las OSFL, enfatizando que las medidas para proteger al sector deben estar en línea con un EBR y reconocer la importancia de respetar los derechos humanos.

⁷ Resolución dirigida a hacer frente a la amenaza que representan los combatientes terroristas extranjeros; los Estados Miembros deben prevenir la radicalización que conduce al terrorismo, frenar el reclutamiento, dificultar los viajes de combatientes terroristas extranjeros, obstaculizar el apoyo financiero a los combatientes terroristas extranjeros.

⁸ Las Notas Interpretativas (NI) son parte de las Recomendaciones del GAFI y están destinadas a clarificar la aplicación de algunas de ellas. El contenido de las NI también es parte de las evaluaciones que se realizan a los países.

⁹ Tomar en cuenta que esta Recomendación aplica actualmente a dos regímenes específicos, el de la República Popular Democrática de Corea y el de Irán, de conformidad con lo establecido en las RCSNU.

⇒ Se aclara la distinción entre OSFL legítimas que son mal utilizadas y aquellas que de forma fraudulenta realizan operaciones de recaudación de fondos presentándose como legítimas.

e Recomendación 15. Nuevas tecnologías.

⇒ En el pleno de octubre de 2018, se modificó el contenido de la recomendación y del glosario para incorporar los Activos Virtuales (AV). Se adoptaron las definiciones de AV, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV); se determinó que los países e instituciones financieras deben tomar medidas para administrar y mitigar los riesgos que surjan de los AV; y, que los países deben garantizar que los PSAV estén regulados, tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridas en las Recomendaciones del GAFI.

⇒ En el pleno de junio de 2019 se adicionó a la NI que los países deben considerar los AV como bienes, productos, fondos u otros activos y otros activos de valor equivalente; establece obligaciones de licenciamiento o registro de los PSAV, la regulación, supervisión y sanciones por incumplimiento de estos, la aplicación de medidas preventivas establecidas en las Recomendaciones¹⁰ y en materia de cooperación internacional.

f Recomendación 18. Controles internos y sucursales y filiales extranjeras. En el pleno de noviembre de 2017 se modificó la NI, en el sentido de hacer referencia a la posibilidad de compartir a nivel de grupo financiero la información

y análisis de transacciones o actividades que parezcan inusuales y que se comparta dicha información cuando sea relevante y apropiada para la gestión de riesgos.

g Recomendación 21. Revelación (*tipping-off*) y confidencialidad.

En el pleno de noviembre de 2017, se modificó el contenido de esta recomendación para clarificar la interacción con los requerimientos de revelación o *tipping-off* de la Recomendación 18¹¹; se agregó una aclaración respecto a que, aun cuando las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados deben tener prohibido por ley revelar el hecho de que se está entregando a la Unidad de Inteligencia Financiera un RTS o información relacionada, estas disposiciones no tienen la intención de inhibir el intercambio de información bajo la Recomendación 18.

Como se observa, en los últimos años se han dado modificaciones importantes a las Recomendaciones del GAFI, a fin de adaptar las mismas a la nueva realidad, a la evolución que con el tiempo tiene el LD/FT/FPADM y a la necesidad de que los países ajusten sus sistemas para implementar efectivamente el estándar internacional. Muchos de estos ajustes requieren para todos los países una actualización de la normativa, ya que se deben incorporar aspectos relevantes en la ley.

En ese sentido, las brechas que Guatemala enfrenta actualmente no solo son las señaladas en el IEM; el país debe implementar las modificaciones que se han incorporado a las Recomendaciones con el fin de adaptarlas a las nuevas necesidades y requerimientos, y que no fueron evaluadas en 2016 porque su entrada en vigor ha sido posterior a dicha fecha.

Por lo que, para una próxima evaluación, el país deberá demostrar que ha cerrado las brechas identificadas en el IEM y que

también ha incorporado en sus sistemas los nuevos requerimientos establecidos en las Recomendaciones; aspectos que serán evaluados tanto a nivel de cumplimiento técnico como de efectividad.

Las brechas de Guatemala no son solo las identificadas en el IEM, también se deben regular e implementar aquellas modificaciones a las Recomendaciones desde 2015 a la fecha. La brecha es mayor a lo señalado en el IEM.

Impacto de una evaluación negativa

Si el país llegara a obtener notas muy bajas en la evaluación de las Recomendaciones, podría correr el riesgo de ser **incorporado como país no cooperante a nivel internacional**.

Pero ¿qué son los países no cooperantes? Se trata de los llamados países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo que son identificados por el GAFI en dos documentos públicos que se publican tres veces al año¹². Constituyen jurisdicciones con medidas débiles para combatir el LD/FT.

1 El primer documento es la Declaración Pública del GAFI, que identifica países o jurisdicciones con deficiencias estratégicas tan graves que el GAFI solicita a sus miembros y no miembros que apliquen contramedidas.

¹⁰ Recomendaciones de la 10 a la 21, relativas a debida diligencia del cliente, mantenimiento de registro, personas expuestas políticamente, banca corresponsal, servicios de transferencia de dinero o valores, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas, dependencia de terceros, controles internos y sucursales y filiales extranjeras, países de mayor riesgo, reporte de operaciones sospechosas y revelación (*tipping-off*) y confidencialidad.

¹¹ Recomendación 18 relacionada a controles internos y sucursales y filiales extranjeras.

¹² Para más información puede consultar el sitio oficial del GAFI: [https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

2 La declaración sobre jurisdicciones bajo mayor vigilancia que identifica a los países o jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus medidas ALD/CFT. El GAFI anima a sus miembros a considerar las deficiencias estratégicas identificadas para estas jurisdicciones. Si un país no logra un progreso suficiente u oportuno, el GAFI puede decidir aumentar su presión sobre el país para que realice un progreso significativo, trasladándolo a la Declaración Pública.

Estas listas son el resultado de las evaluaciones que periódicamente realiza el organismo sobre el cumplimiento de los estándares para prevenir, detectar y judicializar estos delitos en el mundo. Además, son importantes porque sirven para alertar a los países miembros del GAFI u organismos similares, sobre las medidas que deben aplicar para ayudar a proteger el sistema financiero de estos delitos al momento de tener alguna relación comercial o transaccional con entidades o instituciones que pertenezcan a países incluidos en estas listas.

Consecuencias de ser incluido en estas listas

Los países incluidos en este listado podrían enfrentar sanciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros organismos internacionales; problemas para obtener préstamos del FMI y el Banco Mundial, entre otros organismos; así como una reducción del comercio internacional o mayores requerimientos de los clientes cuando son procedentes de uno de los países listados.

En ese sentido, dado el mayor riesgo de LD/FT que presentan los países incluidos

en las referidas listas, la mayoría de las autoridades financieras exigen a sus PO que dispongan de protecciones adecuadas contra el LD/FT basadas en el riesgo para mitigar esa amenaza.

Lo anterior significa que todas las transacciones con el país estarían sujetas a un control cada vez mayor; como resultado, las remesas extranjeras disminuirían y las instituciones financieras evitarán realizar transacciones en divisas altamente transferibles (dólares, euros, entre otros).

Como se mencionó, podría dar lugar a sanciones económicas por parte de instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y otras organizaciones similares. El resultado sería la suspensión inmediata o condicionamiento de las asistencias de dichos organismos.

Las instituciones financieras internacionales también podrían detener, ralentizar o burocratizar la autorización de líneas de crédito a las empresas que operan desde el país.

En la Declaración Pública del GAFI, actualmente se encuentra Corea del Norte e Irán; y observando su situación, estos dos países han sido totalmente marginados por la comunidad internacional. Ello tiene como resultado no solo el aislamiento económico, sino también el debilitamiento de su posición en otros asuntos internacionales.

Otra consecuencia que se puede señalar es el impacto en la reputación internacional del país y la credibilidad (financiera y diplomática), lo que afecta al país, pero también a los ciudadanos que residen en diferentes partes del mundo.

Tradicionalmente, la mayoría de las organizaciones del mundo ponen barreras comerciales a los países incluidos en las listas del GAFI. Nuevamente se puede mencionar el ejemplo de Irán y Corea del Norte, que no pueden exportar sus productos a los mercados internacionales.

Con lo señalado se puede concluir que ser incluidos en las listas del GAFI impactaría negativamente en la economía del país, incluso afectando otros sectores como el social y humanitario, así como las relaciones internacionales y la credibilidad y reputación del país y sus ciudadanos.

Recordemos que Guatemala fue incluida en la lista del GAFI en junio de 2001, y fue hasta julio de 2004 que fue excluida de la misma, impactando con ello la economía e inversión internacional. El país tuvo que realizar un proceso integral y continuo de acciones para fortalecer su sistema ALA/CFT, iniciando con la promulgación de la normativa que en ese momento era pertinente.

Nuevamente nos enfrentamos al reto de fortalecer nuestro marco normativo para cerrar las brechas identificadas en la evaluación mutua de 2016, así como incorporar aquellos aspectos relativos a las modificaciones en las Recomendaciones del GAFI, y todo ello previo a la próxima evaluación, de no ser así la incorporación en las listas del GAFI podría ser un retroceso sustancial a todo lo que se ha trabajado, lo que afectaría a Guatemala y sus ciudadanos.

La actualización de la normativa es un aspecto importante para cumplir los estándares internacionales, en la Iniciativa de Ley 5820 se han incorporado los elementos requeridos para cerrar las brechas y regular lo establecido en los cambios que las Recomendaciones han sufrido; pero es necesario que esta sea aprobada y que se encuentre vigente antes del nuevo proceso de evaluación del país.



**Blanca Azucena
Veliz Saucedo**

Profesional del Departamento Administrativo,
Análisis Estratégico y Tecnología de la SIB

Licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales, con Maestría en Relaciones Internacionales e Imagen Pública, ambos títulos otorgados por la Universidad Galileo. Ha participado en cursos de importancia como las 40 Recomendaciones del GAFI otorgado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Posee experiencia en requerimientos legales nacionales e internacionales, relaciones internacionales de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Secretaría Técnica de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (COPRECLAF); y, en el ámbito de los estándares internacionales ALD/CFT y cumplimiento.

Guatemala cuenta con un aparato normativo destinado para prevenir y reprimir los delitos del Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LD/FT). No obstante, siempre se encontrará expuesta a riesgos de LD/FT ya sea por su posición geográfica, coyuntura nacional, entre otros riesgos que debe afrontar y mitigar para tener un sistema financiero y economía nacional saludables, impactando así en el bienestar y seguridad de la sociedad guatemalteca. Para ello las instituciones del Estado y sector privado deben tomar acciones coordinadas y conjuntas encaminadas a prevenir y reprimir el LD/FT. A continuación, se brinda un contexto sobre la lucha contra el LD/FT, y luego se abordan las razones por las que es relevante una coordinación nacional en el marco del combate a los ilícitos en Guatemala.

Relevancia de la coordinación de los esfuerzos para prevenir y reprimir el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM)



Contexto

En el plano internacional, como respuesta para prevenir los delitos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero procedente de tales actividades ilícitas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desarrolló recomendaciones que actualmente se conocen como *Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT), y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)*. Es importante mencionar que los estándares se someten a una constante revisión para actualizarlos derivado de los riesgos emergentes.

En total suman 40 Recomendaciones del GAFI agrupadas en distintas temáticas según de que trate cada estándar, y en particular dedica la primera sección de estas a “*Políticas y Coordinación ALA/CFT*” (antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo), agrupando dos recomendaciones: Recomendación 1 - Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo; y Recomendación 2 - Cooperación y coordinación nacional.

La Recomendación 1 establece que, los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, también deben designar a una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar tales riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente. Por su parte, la Recomendación 2 establece que, los países deben contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados (mediante la Recomendación 1), las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente; asimismo, los países deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación que sea responsable de dichas políticas.



En ese sentido, el GAFI solicita que los países aseguren que los siguientes actores cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar, entablar una coordinación e intercambiar información a nivel nacional en el desarrollo e implementación de las políticas mencionadas y actividades para combatir el LA/FT/FPADM:

- Las autoridades que hacen las políticas.
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el caso de Guatemala es la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
- Las autoridades del orden público, como el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil, entre otros.
- Los supervisores.
- Otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo.

Estas recomendaciones requieren un trabajo articulado en el que varias instituciones del país participen en la lucha contra los ilícitos mencionados, y en virtud de ello, se creó en 2010 la *Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala*¹ (COPRECLAF); la Comisión se encarga de coordinar la Evaluación Nacional de Riesgos de LD/FT (ENR LD/FT) de la que deviene un plan de acción con el que se busca mitigar los riesgos identificados a nivel país, además tiene por objeto coordinar los esfuerzos y la cooperación entre las instituciones del Estado que participan dentro de la estructura legal de prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos de LD/FT, cumpliendo así con las Recomendaciones 1 y 2, respectivamente.

¹ Información de la COPRECLAF disponible en: <https://vicepresidencia.gob.gt/gabinetes-y-consejos> y <https://www.sib.gob.gt/web/sib/sistema-prevencion-LD-FT/acciones-Tomadas>

Relevancia

¿Por qué es importante que se coordine a nivel nacional los esfuerzos para prevenir y reprimir el LD/FT/FPADM?

Considerando que una de las razones por las cuales es importante la coordinación de tales esfuerzos: es el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el GAFI, las 40 Recomendaciones. Pero también hay otras razones por las cuales la coordinación nacional en el ámbito de la lucha contra el LD/FT/FPADM es de suma relevancia: prevenir y reprimir los delitos de lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, así como contar con un sistema anti LD y contra FT nacional efectivo.

Otra de las funciones del GAFI es monitorear el progreso de los países en la implementación de las Recomendaciones a través de rondas de Evaluaciones Mutuas (EM) que se llevan a cabo cada cierto tiempo determinado por el organismo. Las EM consisten en una revisión de los sistemas y mecanismos ALD/CFT creados por los países para prevenir y reprimir los ilícitos en mención, así pues, las EM son un proceso por medio del cual se examina la implementación y aplicación efectiva de las normas del GAFI.

Guatemala ya ha sido objeto de dos Evaluaciones Mutuas, la primera en 2010², y la segunda realizada en 2016. De acuerdo con la última EM, el sistema de prevención y represión de LA/FT de Guatemala necesita cerrar brechas que han sido

señaladas en el Informe de Evaluación Mutua³, mismas que se traducen en compromisos de país, en concreto, ciertas áreas del sistema ALA/CFT guatemalteco requieren mejoras para alcanzar mejores resultados de efectividad.

Sin embargo, para fortalecer dicho sistema y llegar a un alto nivel de efectividad, es necesario que exista coordinación entre todas las instituciones del Estado y demás actores relevantes, que de forma conjunta trabajen para subsanar las brechas en el sistema, enfocando los recursos disponibles de manera eficiente.

Para reprimir el lavado de dinero, se requieren acciones de investigación y sanción, y en este caso deben intervenir (i) las Personas Obligadas proporcionando información; (ii) la IVE proveyendo inteligencia financiera al Ministerio Público; (iii) el MP investigando y persiguiendo penalmente a los criminales; y, (iv) el Organismo Judicial juzgando y dando una sentencia.

En el ejemplo anterior, intervienen como mínimo cuatro actores, ya que hay más instituciones que pueden servir como fuentes de información para una investigación. También es necesario que las autoridades, instituciones, entidades y sector privado colaboren entre sí de forma conjunta y multidisciplinaria para superar los retos que requieren intervención de actores con experticia diversa. Por esto, combatir el LD/FT/FPADM es un esfuerzo de país.

En este punto es fundamental resaltar que los países que no cumplen de manera eficiente con los estándares ALA/CFT, y más aún, no logran subsanar las brechas en sus sistemas, son responsabilizados por el GAFI a través de posicionarlos en una lista gris de jurisdicciones no cooperantes en el combate al LA/FT.

En los próximos años, Guatemala será evaluada nuevamente en el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, así como en el avance logrado en el cierre de las brechas señaladas, por esta razón es crucial contar con la actualización del marco legal en materia de LD/FT que se está promoviendo, debido a que con las reformas propuestas a la normativa de mérito, se subsanarían los compromisos adquiridos por Guatemala derivados de su última EM.

Consecuentemente, la relevancia de coordinar los esfuerzos para luchar contra los ilícitos señalados es llegar a tener un sistema ALD/CFT nacional que sea efectivo, lo que de forma subsecuente otorga beneficios a la nación: se mitigan los riesgos encontrados en la ENR LD/FT, se cierran las brechas señaladas en el IEM, lo cual promueve a Guatemala como un país cooperante, esto a su vez provoca un impacto positivo en la imagen del país a nivel internacional, el Estado recibe una mejor calificación de riesgo favoreciendo el acceso a fondos de deuda pública y atrayendo más inversión extranjera directa, resultando además en un sistema financiero estable y saludable.

2 Puede consultar el IEM 2010 de Guatemala en: <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/guatemala/evaluaciones-mutuas-8/157-guatemala-3era-ronda-2010>

3 Puede consultar el IEM 2016 de Guatemala en: <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/guatemala/evaluaciones-mutuas-8/158-iem-guatemala-cuartaronda>

Estrategias de reaseguro y su aplicación



**Nancy Marisol
Gómez Villela de Anleu**

Inspector del Departamento de Registros y Seguridad de la SIB

Licenciada en Informática y Administración de Negocios, con Maestría en Administración Financiera y Bancaria, ambos títulos otorgados por la Universidad Galileo. Con 18 años de experiencia en administración de registros de compañías aseguradoras, gestión y automatización de procesos de la SIB.



**Leonel Alejandro
Hernández Ramos**

Inspector del Departamento de Supervisión de Riesgos de Seguros y Otros de la SIB

Contador Público y Auditor por la Universidad Rural de Guatemala, con Maestría en Administración de Negocios Financieros por la Universidad Galileo. Además, cuenta con una Certificación en Gestión de Riesgos NCR emitida por la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y el Club de Gestión de Riesgos de España.

El reaseguro es el método por el cual las aseguradoras trasladan a los reaseguradores total o parcialmente los riesgos que asume en las pólizas de seguros, con el fin de reducir el monto de su pérdida. El contrato de reaseguro es independiente del contrato de seguro.

Además del reaseguro, las aseguradoras pueden transferir los riesgos asumidos a través del coaseguro, sistema mediante el cual la aseguradora comparte con otra un riesgo determinado. El reaseguro y coaseguro son herramientas vitales para las aseguradoras, pues les permiten asumir riesgos mayores y paralelamente maximizar utilidades.

El asegurador luego de definir su apetito del riesgo (parte integral de la gestión del riesgo), establece que parte de los riesgos podrían superar sus posibilidades financieras y causar desequilibrio en la cartera, trasladándola al reasegurador.

La parte del riesgo que retiene la aseguradora es la pérdida que la administración está dispuesta a asumir por su cuenta cuando los asegurados presenten los reclamos.

Por ser el reaseguro el principal mitigador de riesgos de las aseguradoras, los reguladores y supervisores de seguros establecen en la normativa el monto máximo de retención de las aseguradoras, a efecto que los mismos guarden relación con su capacidad económica. En Guatemala, este aspecto está regulado en la Resolución JM-6-2011 que contiene el Reglamento para el Registro de Reaseguradoras o Aseguradoras Extranjeras, de Contratos de Reaseguro y Determinación de los Límites o Plenos de Retención, donde se establece que, cuando los límites o plenos sean superiores al ocho por ciento del patrimonio técnico de la aseguradora, deberá contar con un dictamen técnico respecto de que dicho límite no pone en riesgo la liquidez y solvencia de la entidad.

Existen principios universales del reaseguro que son esenciales para comprender la función que tiene dicha herramienta para las compañías de seguro, a continuación se destacan los siguientes:

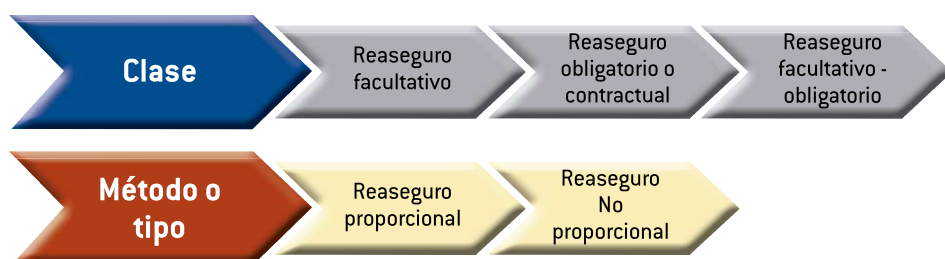
- **Principio de buena fe:** es aplicable al seguro y reaseguro, en este último posee vital importancia, derivado de la operatoria del negocio; confianza, honestidad, actitud positiva y diligencia, que fortalecen la relación.
- **Principio de compartir la buena suerte y fortuna:** la compañía cedente debe suscribir los negocios tal como suscribiría su retención neta si no existiera reaseguro.
- **Principio de independencia:** se fundamenta, principalmente, en la necesidad del asegurador de proteger su relación con el cliente y evitar el ejercicio de acciones por parte del asegurado contra el reasegurador.

Funciones del reaseguro

Las funciones del reaseguro y su estructura se definen a partir de las estrategias y aplicación que desee utilizar la aseguradora de acuerdo con los objetivos planteados por la alta dirección, cada metodología es funcional para las características que fue diseñada y su eficacia es medida conforme su aplicación.

Estructura del reaseguro

En cuanto a la estructura del reaseguro, es posible distinguir entre clase de reaseguro y métodos o tipos de reaseguro.



Fuente: propia del autor.

En ese sentido, la clase de reaseguro según la relación entre aseguradora y reasegurador, puede ser reaseguro facultativo y reaseguro obligatorio o contractual; asimismo, la combinación entre estas clases permite obtener una de reaseguro llamado facultativo-obligatorio. Para mejor comprensión, a continuación se describen dichas clases:

- **Reaseguro facultativo:** relación entre la aseguradora y el reasegurador o reaseguradores uno a uno o caso a caso, en cuanto a los riesgos. Generalmente, se suscribe en condiciones idénticas al seguro original. En esta clase de reaseguro la cedente no está obligada a ceder y el reasegurador no está obligado a aceptar responsabilidad.

- **Reaseguro obligatorio o contractual:** consiste en un convenio entre asegurador directo y uno o más reaseguradores, por medio del cual la cedente se obliga a entregar y los reaseguradores se obligan a aceptar, todos los negocios que se encuentren dentro de límites previamente establecidos.

- **Reaseguro facultativo-obligatorio:** se establece un acuerdo previo para la cartera de negocios de la cedente y se combinan los aspectos de facultad y obligatoriedad de las dos clases descritas anteriormente. Cuando la cedente suscribe algún negocio que cumpla con las condiciones del contrato de reaseguro, ella está facultada para decidir si realiza la cesión al contrato, es decir que no está obligada a ceder todos los casos. Sin embargo, el reasegurador sí está obligado a aceptar los riesgos que le traslade la aseguradora.

Por su parte, los métodos o tipos de reaseguro se dividen en proporcional y no proporcional; los cuales se describen a continuación:

1 Reaseguro proporcional: consiste en la cobertura por parte de los reaseguradores de un porcentaje, fijo o variable, de todas o algunas de las pólizas de la cartera de la aseguradora. La característica principal de estos contratos es que los reaseguradores participan en las primas y siniestros, en la misma proporción que participa en la suma asegurada. Los tipos de contratos automáticos que se encuentran en el reaseguro proporcional son los siguientes:

Contrato cuota parte: contrato de reaseguro proporcional y automático en el cual la aseguradora se obliga a ceder un porcentaje fijo de la suma asegurada de cada póliza o riesgo emitido en un determinado ramo. Las primas y siniestros estarán sujetos al mismo porcentaje que afecta a la suma asegurada.

Contrato excedente: la cedente decide qué fracción o cantidad de cada negocio original desea administrar en retención directa y el saldo o excedente de la retención debe validarse con la capacidad del contrato.

2 Reaseguro no proporcional: en términos generales se caracteriza por establecer una repartición de las responsabilidades entre las aseguradoras y los reaseguradores con base en los siniestros. Los reaseguradores no participan proporcionalmente de las primas, siniestros y sumas aseguradas. Las aseguradoras se comprometen a pagar todos los reclamos hasta una cantidad acordada previamente (prioridad o deducible) y el monto de cualquier siniestro que exceda la prioridad es asumida por los reaseguradores, hasta un límite máximo (cobertura o límite de responsabilidad). Entre estos podemos mencionar los siguientes:

- **Exceso de pérdida (*Excess of Loss, X/L*):** el reasegurador es responsable cuando la ocurrencia de una pérdida exceda la prioridad o retención de la cedente. El reasegurador paga hasta el límite definido en el contrato. Existe un contrato para proteger pérdidas individuales (cada póliza), en cuyo caso el contrato se denomina exceso de pérdida operativo y un contrato para proteger pérdidas colectivas asociadas a un suceso o evento, en cuyo caso se le denomina exceso de pérdida catastrófico o por evento catastrófico (cubre todas las pólizas).

- **Exceso de siniestralidad (*Stop Loss*):** este contrato consiste en limitar la proporción de pérdidas efectivas a un porcentaje convenido (tasa de siniestralidad convenida en función de la historia siniestral). La cobertura del reasegurador se limita a la tasa de siniestralidad real, la cual se determina como un porcentaje que resulte de un año calendario y un monto máximo establecido previamente.

Por último, el reaseguro es una estrategia o herramienta de transferencia del riesgo de suscripción; el diseño de una estructura de reaseguro dependerá de los ramos y tipos de seguros que comercialice la aseguradora; y, los límites de retención serán definidos de conformidad con los niveles de tolerancia al riesgo y la capacidad técnica y financiera de la aseguradora.

Fuente: Escuela de Seguros de Chile – Módulo Estrategias de Reaseguro y su Aplicación.





Sandra María Lemus

CISO - Oficial de Seguridad de la Información

Ingeniera en Ciencias y Sistemas por la Universidad de San Carlos de Guatemala; Máster en Auditoría de Tecnología de la Información por la Universidad Galileo de Guatemala; y, Máster en Tecnologías Informáticas Avanzadas por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Certificada internacionalmente como Auditora de Sistemas de Información (CISA, por sus siglas en inglés), COBIT 5 e ITIL 4. Es Especialista en Aseguramiento y Control de Tecnologías de la Información, con más de 18 años de experiencia.

Los años recientes se han caracterizado por el incremento en el uso de la tecnología, convirtiéndose en la ventaja competitiva de muchas empresas financieras, principalmente, en los servicios que prestan a sus clientes. Aunado a lo anterior, el 2020 estuvo marcado por una pandemia global que ha afectado todos los sectores y que no se ha superado, lo cual conllevó al incremento de las operaciones digitales, teletrabajo y servicios a distancia que implican más dependencia tecnológica.

Esta situación representa nuevas oportunidades, pero también la asunción de nuevos riesgos, dentro de estos los cibernéticos, razón por la que el último año ha estado marcado también por ciberataques sin precedentes, como bien lo indican expertos en la materia, las empresas ya no solo se cuestionan si serán ciberatacadas, sino que la pregunta relevante es ¿Cuándo se sufrirá el ciberataque? Por citar algunos ejemplos¹:

¹ Ataques por orden de mención: *SolarWinds* (Dic. 2020), *Twitter* (Jul. 2020), Sistema de bancos de Hungría (Sept. 2020), Colonial Pipeline (May. 2021), JBS -mayor productor de carnes a nivel mundial- (Jun. 2021) y Banco Pichincha S. A. -uno de los más importantes de Ecuador (Oct. 2021).

Importancia de la ciber resiliencia en las entidades financieras guatemaltecas



el ataque sufrido por una cadena de suministro de *software* global, con un radio de afectación de al menos 18,000 organizaciones, entre ellas empresas de gobierno de los Estados Unidos de América, o un ataque perpetrado a cientos de cuentas de una red social pertenecientes a expresidentes, directores ejecutivos y celebridades, comprometidas por nada menos que un joven de 17 años; también, un ataque de denegación de servicio masivo, utilizando un volumen de tráfico de datos diez veces mayor que la cantidad que generalmente se ve en eventos similares; o, de los ciberataques más recientes y ahora comunes, la interrupción de servicios en grandes corporaciones por ataques de *ransomware*² y de filtración de información.

Esto, inevitablemente, lleva a pensar en las acciones que se deben realizar para proteger a nuestras organizaciones. Hasta hace unos años la mayor preocupación era mantener segura la información; es decir la integridad, confidencialidad y disponibilidad de esta; luego, se identificó la importancia de los activos críticos utilizados para gestionar la información y esta en sí misma en el ciberespacio³, por lo que se acuñó el concepto de ciberseguridad. Sin embargo, los ciberataques de hoy en día, aunados a una pandemia médica global, hacen que nuevamente se replantee el término de ciberseguridad por uno más amplio, que conduzca no solo las acciones para proteger a las organizaciones, sino para hacerlas resilientes ante cualquier situación que ponga en riesgo la continuidad de sus operaciones.

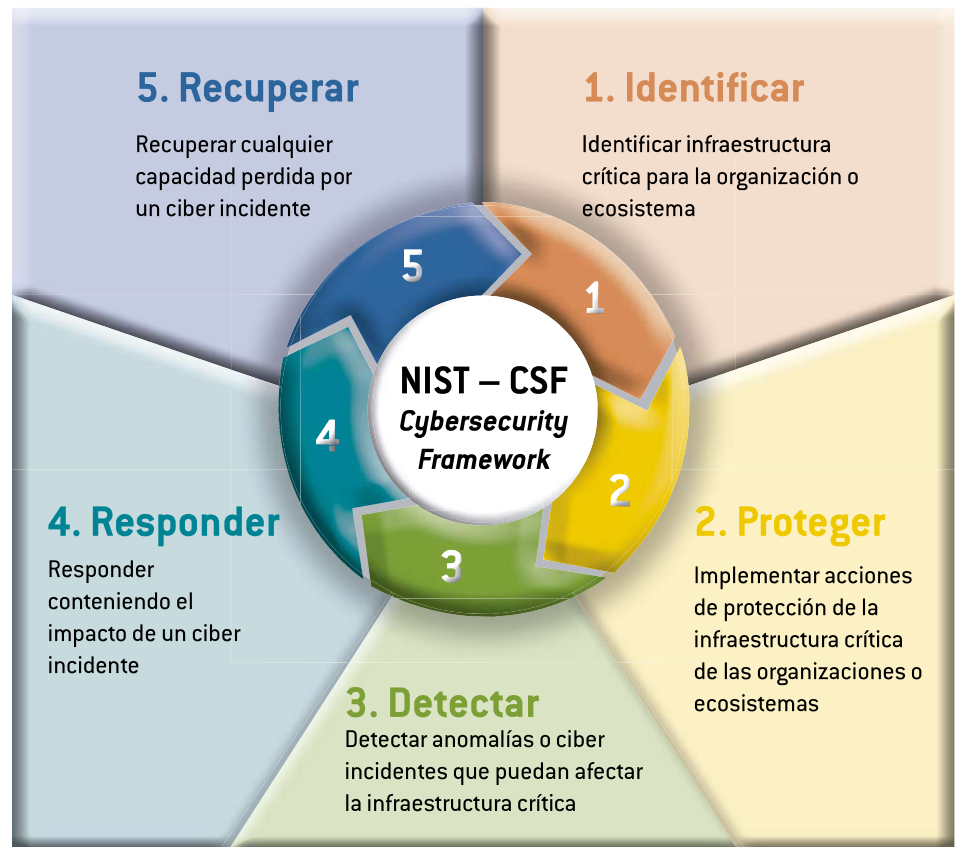
En la actualidad las preocupaciones no se enfocan solo a prevenir ser objeto de un ataque, sino también a la efectividad con la que se restablecen las operaciones, para responder adecuadamente a cualquier incidente, incluyendo un ciberataque, lo que nos lleva a definir el término de resiliencia digital o ciber resiliencia, como se describe a continuación:

Ciber resiliencia o capacidad de una organización de adaptarse rápidamente a las interrupciones del negocio aprovechando sus capacidades digitales, no solo para restaurar las operaciones del negocio, sino también para crecer y capitalizar las condiciones modificadas.

En consecuencia, la ciber resiliencia constituye una estrategia para adaptarse, innovar e involucrarse en la gestión de los riesgos cibernéticos,

prepararse para contener un posible ciberataque y recuperar cualquier capacidad, fortaleciéndose en el proceso; siendo estos aspectos fundamentales cuando nos referimos a entidades financieras que deben tener la capacidad de continuar brindando servicios a sus clientes, salvaguardando al sistema financiero en su conjunto y contribuyendo con la estabilidad financiera y económica de un país.

Comprendiendo estas necesidades y anticipándose al inesperado y convulsionado futuro, en 2018, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) publicó la versión 1.1 del Marco de Ciberseguridad NIST CSF, que establece cinco funciones de alto nivel o pilares principales en el desarrollo de un programa de ciberseguridad exitoso y holístico, ayudando a las organizaciones a expresar fácilmente su gestión del riesgo de ciberseguridad a un alto nivel y posibilitando decisiones de respuesta y continuidad.

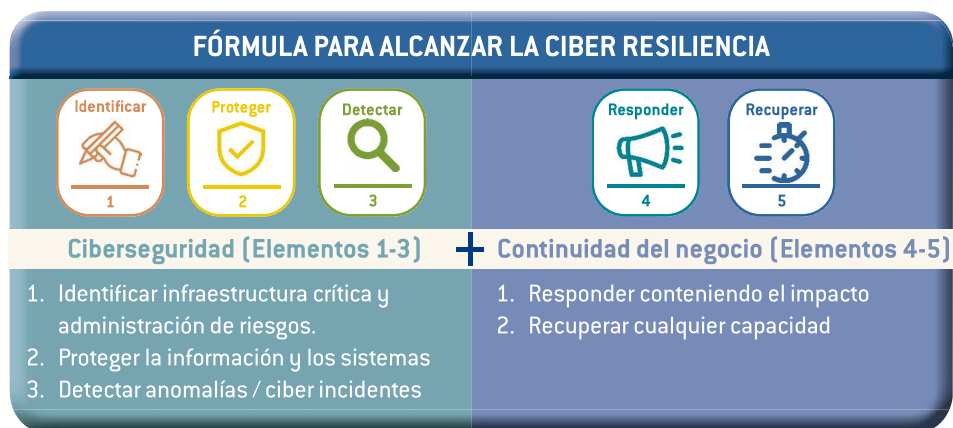


Fuente: Marco NIST CSF - Cybersecurity Framework

² *Ramsonware*: "secuestro de datos" en español, es un tipo de ataque cibernético que utiliza un *software* malicioso para comprometer uno o varios equipos, secuestrando la información y exigiendo el pago de un rescate para recuperar los datos y evitar otros daños colaterales.

³ Ciberespacio: ámbito virtual creado por medios informáticos. Ref. RAE.

Este marco explica, mediante una fórmula muy sencilla, el concepto de resiliencia digital o ciber resiliencia, como la agregación de la ciberseguridad y de la continuidad de las operaciones de una organización.



Fuente: Instituto de Recuperación ante Desastres (DRI, por sus siglas en inglés) www.drii.org.

Partiendo de esta idea, de acuerdo con expertos, se deben aprovechar las fortalezas digitales de las organizaciones con el fin de:

- 1. Caerse menos:** adecuar las capacidades digitales de una organización para detectar y responder ante cualquier incidente que afecte sus operaciones. Para esto, se sugiere utilizar una metodología ante desastres y pensar sobre lo peor que podría pasar y así prepararse ante las consecuencias. Un ejemplo muy ilustrativo es *Netflix*, empresa para la cual es muy importante no caer, mientras se atienden los diversos requerimientos de 203 millones de suscriptores a nivel mundial; para lograr este objetivo, diseñaron una colección de herramientas para prepararse y responder ante posibles escenarios de caos, llamada *Netflix Simian Army*⁴.
- 2. Resistir a la caída:** priorizar inteligentemente, esto se logra al determinar hacia dónde dirigir los esfuerzos y cómo asignar recursos limitados para minimizar el impacto. Se deben proteger las áreas que representan los mayores riesgos y para esto el marco NIST CSF propone un enfoque cibernético bastante holístico basado en riesgos, de tal forma que al priorizar en función de los riesgos se proteja lo más importante y, en consecuencia, se garantice que al caer se resistirá a esta caída (menor impacto).
- 3. Levantarse más fuerte:** esta pandemia ha dejado importantes lecciones aprendidas, entre estas, reinventarse constantemente no solo para sobrevivir sino también para crecer. Parte de esta reinversión es lograr hacer comunidades, unir esfuerzos entre las distintas empresas para salvaguardar su información como su principal activo y continuar protegiéndose como sector, país o sistema financiero global.

Conscientes de la importancia de la ciber resiliencia para el sector financiero, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en 2018, publicó el estudio *Cyber-resilience: Range of practices* sobre las estrategias de ciber resiliencia adoptadas a nivel global, destacando que los esfuerzos varían en las distintas regiones o países, por lo que se hace necesaria la implementación de estrategias de ciber resiliencia que converjan globalmente y que permitan compartir experiencias, así como promover esfuerzos conjuntos a nivel del sector financiero para que sea resiliente.

Asimismo, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, propusieron en 2020, el Reglamento sobre Resiliencia Operativa Digital del Sector Financiero, con el propósito de fijar requisitos uniformes sobre la seguridad de la infraestructura tecnológica y sistemas de información, que sustentan los procesos empresariales de las entidades financieras, los cuales son necesarios para lograr un elevado nivel común de ciber resiliencia.

En Guatemala, también se han realizado esfuerzos para fortalecer la capacidad de ciber resiliencia de las entidades del sector financiero, lo cual conllevó la modificación del Reglamento para la Administración del Riesgo Tecnológico (Resolución JM-102-2011), con el propósito de fortalecer la ciberseguridad en las entidades supervisadas, impulsando entre otros, el fortalecimiento de la función del Oficial de Seguridad de la Información (CISO, por sus siglas en inglés) en las entidades sujetas de su cumplimiento, así como establecer parámetros mínimos que cada entidad debe implementar en términos de ciberseguridad y continuidad; por su parte, la Superintendencia de Bancos también nombró la función de CISO y continúa desarrollando estrategias para mejorar su capacidad de ciber resiliencia y la del sistema financiero guatemalteco.

Ante el uso intensivo de tecnología, el incremento sin precedentes de los servicios tecnológicos y el apareamiento continuo de novedosas tipologías de ciberataques, se evidencia que la ciber resiliencia no es una estrategia que se implementa en una sola ocasión, sino esta debe ser de alto nivel para las organizaciones, misma que debe fortalecerse continuamente, como parte del bienestar de las entidades financieras, sus clientes y el sistema financiero en su conjunto.

⁴ *Netflix Simian Army*: proviene de la filosofía "Chaos Monkey", o de prepararse ante la idea de liberar un primer mono salvaje en el centro de datos para hacer desastres y masticar cables, todo mientras se sigue sirviendo a los clientes sin interrupciones y a este mono salvaje le siguió un ejército de monos, preparando a *Netflix* ante cualquier falla, pensando en el caos total.

Provisiones bajo el enfoque de pérdidas esperadas



Hilda María Pacheco Escobar de Figueroa

Supervisor del Departamento de Análisis Macropudencial y Estándares de Supervisión de la SIB

Ingeniera Industrial, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con Maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Landívar y Posgrado en Economía, Finanzas y Banca Central obtenido por el Programa de Estudios Superiores del Banco de Guatemala. Con experiencia en la medición y evaluación de riesgos financieros, así como en la implementación de metodologías prospectivas para apoyar la supervisión y regulación de riesgos. Es Subcoordinadora de la Comisión de Modernización Integral (CMI) de la Superintendencia de Bancos encargada de realizar los análisis técnicos y cuantitativos necesarios para la modernización e implementación de metodologías, modelos y herramientas avanzadas de evaluación de riesgos.



Pablo Antonio Marroquín Fernández

Asesor del Despacho Central de la SIB

Ingeniero Químico Industrial y Licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Finanzas por la Universidad Rafael Landívar. Ha realizado estudios de Posgrado en Gerencia Avanzada del INCAE y en Economía de Banca Central, Métodos Cuantitativos y Teoría Económica del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). Ha desarrollado su carrera en diferentes áreas, entre ellas la supervisión y regulación del sector financiero, el análisis de la estabilidad financiera y el diseño de políticas macropudenciales.

Históricamente los bancos han gestionado el riesgo de crédito bajo el enfoque basado de pérdidas incurridas, el cual implica reconocer las pérdidas crediticias con rezago, es decir, luego de que un evento haya causado el deterioro del valor en los activos y las registra contablemente en el balance con datos pasados, en otras palabras, tiene la característica de

ser *ex post*, ya que no permite evaluar prospectivamente la solvencia de los deudores y, por ende, de los bancos, tomando en consideración que los mismos reconocen el deterioro de sus activos de forma tardía, lo cual se traduce en un reconocimiento de provisiones insuficientes. Una de las principales lecciones de la crisis financiera internacional de 2008 fue que no se tomó en cuenta las pérdidas crediticias esperadas durante el ciclo de vida de un préstamo y esta debilidad implicó realizar esfuerzos, a nivel internacional, para diseñar e implementar herramientas para anticipar las pérdidas crediticias y mitigar que la regulación amplificará los efectos adversos de las mismas derivado de su prociclicidad¹. En efecto, el G-20 impulsó que las normas bancarias adoptasen un enfoque más prospectivo en el reconocimiento del deterioro de los préstamos incobrables, lo que conllevó a la aplicación generalizada del enfoque de pérdida esperada.

En este contexto, tanto el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Comité de Basilea), como los dos principales órganos contables, el Consejo Internacional de Normas Contables (IASB, por sus siglas en inglés) y el Consejo Estadounidense de Normas Contables (FASB, por sus siglas en inglés), coincidieron en que se deben reconocer las pérdidas crediticias desde una etapa temprana, por lo que impulsaron la adopción del enfoque basado en pérdidas esperadas, que no es más que reconocer las pérdidas crediticias desde el momento de la concesión del crédito, dado que todos los deudores tienen alguna probabilidad de incumplir con sus obligaciones financieras, por lo que no es necesario esperar a que ocurra un evento o un activador para reconocer y transparentar las pérdidas crediticias. En este sentido, las provisiones deben ser prospectivas, suficientes y oportunas, por lo que las políticas de gestión de riesgo de crédito han de

tener en cuenta la experiencia de los administradores bancarios y la necesidad de anticiparse a los ciclos económicos, así como de proteger la calidad de los activos, la solvencia de la entidad, la continuidad del negocio y principalmente, la confianza de los depositantes en una adecuada gestión de los riesgos.

Al respecto, el enfoque de pérdidas esperadas hace énfasis en las pérdidas futuras por su carácter prospectivo, lo cual permite anticipar el deterioro crediticio de un deudor y evaluar de mejor manera el riesgo en que incurren las instituciones financieras, lo cual permite una mejor asignación de capital en función a la relación rentabilidad/riesgo por líneas de negocio para una mejor toma de decisiones. La transición de un enfoque de pérdidas incurridas a uno de pérdidas esperadas ha sido abordada por la mayoría de los países, en cumplimiento a los estándares del Comité de Basilea, con diversos grados de sofisticación y complejidad, así como con diferentes procesos de implementación en función de las características intrínsecas de los diferentes sistemas financieros².

Los componentes de la pérdida esperada y los principios básicos del Comité de Basilea

Desde 2004, dentro de los enfoques de cálculo de capital por riesgo de crédito, bajo metodologías internas (IRB, por sus siglas en inglés), el Comité de Basilea incluyó explícitamente el uso de los tres componentes básicos para el cálculo de las pérdidas esperadas: i) la probabilidad de incumplimiento (PD, *Probability of Default*),

ii) la pérdida dado el incumplimiento (LGD, *Loss Given Default*), y iii) la exposición en caso de incumplimiento (EAD, *Exposure at Default*). La pérdida crediticia esperada (ECL, por sus siglas en inglés), se define como el producto de esos tres componentes ($ECL = PD \times LGD \times EAD$).

Por su parte, los Principios Básicos³ para una Supervisión Bancaria Eficaz (BCPs, por sus siglas en inglés), emitidos por el Comité de Basilea, hacen referencia a los criterios que deben ser considerados para contar con una adecuada regulación y supervisión prudencial del riesgo de crédito. En este contexto los principios más importantes son: i) el principio 8 relacionado con el enfoque de supervisión y el principio 14 de gobierno corporativo, los cuales señalan que el supervisor debe contar con una metodología de evaluación prospectiva del perfil de riesgos, tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa, así como asegurarse de que las entidades cuenten con sanas prácticas en materia de gobierno corporativo, lo cual implica que debe haber congruencia en las políticas, procedimientos y estrategias en relación con el perfil de riesgo de la entidad; ii) el principio 15 vinculado al proceso de gestión del riesgo en general; y, el principio 17 al riesgo de crédito en particular, los cuales resaltan la importancia de que el supervisor debe asegurarse que las entidades posean un proceso integral de riesgo que les permitan identificar, cuantificar, evaluar y mitigar el riesgo de crédito y que a su vez estos sean acordes al perfil de riesgo de la entidad. Adicionalmente, los principios resaltan la importancia de una gestión oportuna, la cual, en esencia se logra con herramientas y modelos prospectivos complementados con elementos cualitativos que permitan, en todo momento, evaluar la solvencia de las instituciones.

¹ El fortalecimiento de los regímenes de reservas o provisiones, desde el punto de vista contable, ya venían siendo discutidos a nivel internacional pero no es hasta después de la crisis que se incluyen en los estándares internacionales de contabilidad.

² Por ejemplo, en la Unión Europea, como consecuencia del mandato recibido del G20 y a la luz del pobre desempeño de los estándares contables durante la crisis financiera internacional de 2008 estableció la aplicación de la IFRS 9 en 2016 a partir de 2018. Asimismo, emitió las directrices sobre las prácticas de gestión del riesgo de crédito, en las cuales se establecen lineamientos para prevenir problemas ligados a los préstamos dudosos, teniendo en cuenta debidamente los efectos procíclicos de las medidas destinadas para hacer frente al problema de la cartera de préstamos deteriorados y los posibles efectos sobre la estabilidad financiera.

³ Los BCPs fueron actualizados en 2012 con el objetivo de fortalecer tales principios considerando las lecciones aprendidas en la crisis financiera internacional y orientados a las nuevas tendencias y desarrollos de modelos de negocios de la industria bancaria.

El enfoque de pérdidas esperadas desde una perspectiva contable

El IASB publicó en 2014, en el contexto de las Normas Internacionales de Información Financiera, la relacionada con Instrumentos Financieros (NIIF 9), que persigue la dotación de provisiones por insolvencias basada en las pérdidas crediticias esperadas (ECL). Por su parte, el FASB publicó en 2016 la norma en materia de provisiones basada en ECL. Las nuevas normas basadas en ECL sustituyen a los modelos basados en pérdidas incurridas implantando un método prospectivo que enfatiza los cambios en la probabilidad de pérdidas crediticias futuras, aun cuando no se necesite un evento activador.

Es importante comentar que las normas de IASB y FASB comparten una serie de características. En efecto, ambos modelos son prospectivos y eliminan el umbral de reconocimiento de las pérdidas crediticias (generalmente de 90 días), de forma que ya no es necesario que se produzca un evento pasado para que se registren provisiones. Además, estas normas obligan a las entidades financieras a cuantificar las pérdidas crediticias esperadas con base en información razonable y fundamentada, que incluye información histórica, actual y prospectiva. Sin embargo, estas dos normas difieren en el grado de reconocimiento de las pérdidas a lo largo de la vida del activo. El FASB exige que se tengan en cuenta las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de un préstamo a partir del momento en el que se otorga, por su parte, el IASB establece un enfoque por etapas.

Al respecto, la NIIF 9 establece que los bancos deben calcular y registrar las pérdidas crediticias esperadas en tres etapas conforme se produce el deterioro de la calidad crediticia del activo. En la etapa 1, se reconocerían las pérdidas crediticias esperadas en los siguientes 12 meses y en las etapas 2 y 3, las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo. Si al momento del reconocimiento inicial, un banco

identifica activos o una cartera de tales activos con posible riesgo de impago sustancial durante el próximo ejercicio, se considerará esos activos conforme a las etapas 2 o 3. Los incrementos significativos del riesgo de crédito pueden evaluarse de forma colectiva. Con esto se consigue que se reconozcan las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo cuando aumente significativamente el riesgo de crédito, aunque no existan todavía indicios al respecto a nivel del instrumento individual. La NIIF 9 considera que un préstamo tiene un riesgo de crédito significativo a partir de una mora de 30 días y, por lo tanto, debe reconocerse en las etapas 2 o 3, en las que las provisiones se basan en las ECL durante toda la vida del activo. La etapa 3 se inicia cuando la calidad crediticia de un activo financiero se deteriora en el punto de incurrir en pérdidas crediticias, para los préstamos en esta etapa de deterioro crediticio, se continuaría reconociéndose la pérdida esperada crediticia durante toda la vida del activo. El modelo del FASB, en cambio, no establece distinciones por etapas (1,2,3) en las normas de provisionamiento, sino que prevé el reconocimiento de las pérdidas esperadas crediticias durante toda la vida del activo desde el momento en que se origina.

Por su parte, el Comité de Basilea, en 2015, estableció las orientaciones para la contabilidad de pérdidas crediticias esperadas que no contravienen las NIIF. En dicho documento, el Comité manifiesta su apoyo al uso de modelos basados en las pérdidas crediticias esperadas y recomendó su aplicación de tal forma que se incentive a los bancos a adoptar prácticas adecuadas de gestión del riesgo de crédito y de provisionamiento. Las orientaciones supervisoras del Comité de Basilea establecen ocho principios dirigidos a los bancos, relativos a sólidos marcos de gobierno corporativo, metodologías, procesos de calificación del riesgo de crédito, el criterio propio basado en la experiencia y correcciones valorativas adecuadas, la validación del modelo de ECL, los datos comunes y la divulgación de información sobre riesgos. Asimismo, recogen tres principios para que los supervisores evalúen de forma adecuada la gestión del riesgo de crédito, el cálculo de las ECL y la suficiencia de capital.

Diferencias entre los enfoques de pérdidas crediticias esperadas IASB – FASB y Modelos de Capital de Basilea

		IASB	FASB	Comité de Basilea
PD	Período de cuantificación	Etapas 1: 12 meses Etapas 2 y 3: Toda la vida del activo.	Toda la vida del activo.	12 meses.
	Sensibilidad al ciclo	Point in Time (PIT), teniendo en cuenta información prospectiva, incluidos factores macroeconómicos		Ciclo económico.
LGD/EAD	Cuantificación	Estimación neutral, teniendo en cuenta información prospectiva, incluidos factores macroeconómicos.		Estimación en una desaceleración económica.

Fuente: BCBS 2016

Prácticas internacionales de la implementación de pérdidas crediticias esperadas

La implementación del enfoque de pérdidas esperadas crediticias para la gestión del riesgo de crédito en las diferentes jurisdicciones ha representado desafíos importantes y conlleva las siguientes ventajas: a) tiene una mayor sensibilidad de las provisiones y resultados de cada entidad en función de su perfil de riesgo; b) mejora la medición del riesgo y de los resultados de las carteras, clientes y operaciones, lo que representa una gestión más efectiva del riesgo de crédito; y, c) fomenta el uso de las herramientas de análisis de estrés y de escenarios en la gestión del riesgo y capital de las entidades.

Algunos de los países que han avanzado en las regulaciones relacionadas a la gestión y medición del riesgo de crédito basados en el enfoque de pérdidas esperadas son: Colombia, Chile, Perú, México, Panamá y Costa Rica. En este sentido, Chile y México utilizan un método estándar de provisiones que dependen de varios factores de riesgo y estiman las provisiones de riesgo de crédito considerando, por un lado, las pérdidas crediticias esperadas, según el enfoque de distribución de pérdidas incurridas latentes, y por el otro, el componente denominado a través del ciclo o *Through-the-cycle* (TTC, por sus siglas en inglés). En ambos países se definen varias metodologías para determinar los parámetros de probabilidad de incumplimiento y la pérdida por el incumplimiento, en función de las características de las operaciones o préstamos, considerando diferentes factores de riesgo.

Por su parte, en Costa Rica, a finales de 2020 se propuso un nuevo esquema o una metodología estándar que encaje dentro de la hoja de ruta para luego migrar a la NIIF 9, el cual tiene una gradualidad de implementación de tres años. Dicha regulación establece una metodología estándar bajo el enfoque de pérdidas esperadas desarrollada por las autoridades de regulación, lo que implica que corresponde a dichas autoridades el diseño del modelo y el cálculo de los parámetros que las entidades utilizarán para calcular las estimaciones crediticias regulatorias. El monto mínimo que la entidad debe mantener registrado al cierre de cada mes representa un piso prudencial por debajo del cual ninguna entidad supervisada puede mantenerse. Adicionalmente, cuentan con estimaciones contracíclicas las cuales permiten disminuir el efecto procíclico de las provisiones específicas sobre el sistema financiero y sus consecuencias sobre el sector real de la economía.

En el caso de Colombia y Perú, las autoridades regulatorias establecen porcentajes mínimos de provisión. En Colombia, dichos porcentajes se determinan mediante modelos de referencia construidos por el ente

supervisor a través de la información enviada por las entidades supervisadas, cuya base es la estimación de pérdidas esperadas siguiendo los lineamientos del Comité de Basilea. Cabe comentar que, bajo la estructura de los modelos de referencia se incorpora al cálculo de las provisiones un componente contracíclico que busca que las entidades constituyan provisiones en épocas de buen desempeño crediticio con el fin de emplearlo en épocas de deterioro crediticio como mitigador del impacto que genera el incremento de provisiones en los estados de resultados. En Perú, el esquema de provisiones del sistema financiero ha evolucionado con el tiempo. En particular, existen varios elementos de la normativa de provisiones que se distinguen de otros países y que fueron desarrollos adecuados al entorno local de riesgos, entre estos elementos se incluye el tratamiento de colaterales y garantías, por lo que se aplica una tasa de provisiones a la porción colateralizada y una tasa mayor a la porción descubierta de un crédito, asegurando así que todo crédito tenga algún grado de provisionamiento mitigando los efectos de valuaciones inadecuadas u optimistas de los colaterales o garantías; los criterios de alineamiento de riesgo, ya que la norma impone un concepto de riesgo común para un mismo deudor incluso cuando este pueda tener comportamientos de pago diferenciado por instituciones, lo anterior favorece e incentiva una conducta uniforme de pago en todo el sistema financiero y un mejor control del riesgo crediticio global; y, la segmentación del portafolio crediticio en diferentes tipos de crédito de acuerdo a los determinantes de riesgo propios de cada uno de ellos, lo cual permite segmentar adecuadamente los portafolios para identificar la sensibilidad de cada uno de ellos a diferentes tipos de choques y tener una mejor aproximación de las vulnerabilidades de cada institución financiera. Asimismo, el esquema de provisiones peruano cuenta con un componente básico y otro cíclico en el caso de las provisiones genéricas, reconociendo la relación positiva que existe entre los ciclos económico y crediticio. De esta manera, durante las etapas de expansión económica se

constituyen colchones que podrán ser utilizados únicamente para constituir provisiones por el deterioro del portafolio durante las etapas negativas del ciclo económico.

La autoridad regulatoria de Panamá establece porcentajes mínimos que deben mantener las entidades, las cuales consideran la calificación crediticia del activo, como las garantías, para lo cual dentro de la norma se detallan los valores presentes de las garantías como mitigantes de riesgo, los cuales fueron estimados tomando en consideración las evidencias históricas de recuperación según la información proporcionada por los bancos. Es importante comentar que, en 2012, la autoridad regulatoria establece la aplicación de las NIIF para todas las entidades financieras por lo que las diferencias entre dichos criterios y los prudenciales fijados dan lugar a la creación de reservas indisponibles. En este sentido, se establece que se efectuarán los cálculos de cómo quedarán los saldos contables aplicando las NIIF y las normas prudenciales emitidas por la autoridad regulatoria. Cuando el cálculo realizado de acuerdo con las NIIF resulte en una mayor reserva o provisión para el banco que la resultante de la utilización de normas prudenciales, el banco contabilizará las NIIF y cuando el impacto de la utilización de normas prudenciales resulte en una mayor reserva o provisión para el banco, se registrará igualmente en resultados el efecto de la utilización de NIIF.

En síntesis, la mayoría de los países latinoamericanos han implementado una metodología estándar que establece un mínimo de provisiones requeridas bajo el enfoque de pérdidas esperadas, sin perjuicio de que conforme se vaya avanzando en la implementación, cada entidad financiera pueda desarrollar sus metodologías con la responsabilidad y certeza razonable de que el monto de estimaciones crediticias es adecuado para el modelo de negocio y perfil de riesgo crediticio de la entidad, y sobre lo cual los estándares internacionales de contabilidad exigen una amplia divulgación.

IMPORTANCIA DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LD/FT)*



Principales beneficios de la iniciativa de ley:



Manifiesta el compromiso del país a nivel internacional en la lucha contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.



Transforma y fortalece el Sistema Nacional contra LD/FT, adoptando un régimen preventivo con un enfoque basado en riesgos y debidamente diferenciado del régimen represivo.



Actualiza el marco legal apegado a los estándares y tratados internacionales de la materia.



Contribuye con el fortalecimiento de los esfuerzos globales y nacionales al combate del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.

*** Iniciativa de Ley 5820.**

Presentada por el Organismo Ejecutivo el 7 de agosto de 2020.

Prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país.

Visite:
www.sib.gob.gt

Conozca
la Iniciativa
de Ley.



YouTube

